

Ecuador: desafíos y oportunidades del proceso electoral 2006

Augusto Barrera G: politólogo ecuatoriano, profesor universitario, especialista en planificación y desarrollo local. Actualmente es concejal en Quito e integrante del Foro Urbano.

Si no se produce algún giro inesperado, tan propio de la crónica inestabilidad política ecuatoriana, las elecciones generales se llevarán a efecto el domingo 15 de octubre de 2006 y la segunda vuelta, el 26 de noviembre. Se trata de las séptimas elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia en 1979, y del octavo presidente de la República de la última década, uno de las más críticos periodos de la historia nacional.

Este texto, además de ordenar la información de la situación preelectoral, sitúa las coordenadas políticas, institucionales y socioeconómicas en las que este proceso ocurrirá. El objetivo es identificar qué es lo que está en juego y, por supuesto, las posibilidades de que el resultado de las elecciones, previstas para el mes de octubre, abra un ciclo de democracia, desarrollo, justicia y, como efecto de ello, estabilidad. Como se argumentará, no es previsible que estas elecciones, por sí mismas, reviertan la tendencia sistémica a la crisis. Aun más: algunos factores actuales indican que puede prolongarse con efectos mucho más graves para la vida de los ecuatorianos.

La encrucijada histórica del país

Como en otros lugares de América Latina, en Ecuador son palpables el agotamiento y el desencanto producidos por dos décadas de hegemonía neoliberal. La forma que ha adquirido este fenómeno es el descalabro institucional y la fragmentación social. En lugar de bloques sociales y políticos articulados, constituidos y enfrentados, como los que se observan en Bolivia, el panorama que se dibuja es el de una descomposición política e institucional que atraviesa todos los estamentos sociales.

El desastre en las instituciones, llevado al punto de no tener Corte Suprema de Justicia por casi un año, no puede ser entendido si solo se circunscribe a la arena institucional. No se trata de un problema de ingeniería, ni puede explicarse únicamente debido a la ausencia de condiciones abstractas de gobernabilidad. El profundo desarreglo es producto del pésimo desempeño económico y social, de las transformaciones en las lógicas de acumulación y del debilitamiento de los actores y los mecanismos que antes permitían la hegemonía política.

Los «mejores años del neoliberalismo ecuatoriano» fueron sostenidos, básicamente, por dos sectores. Por un lado, el núcleo oligárquico-financiero costeño (de larga data en la historia del país) y, más recientemente, el sector financiero serrano. El primero de estos grupos fue golpeado duramente por la crisis financiera de 1999 y por la pérdida de espacios decisivos de poder, a lo que sumó su incapacidad para construir un proyecto de carácter nacional. La disputa por el liderazgo entre los ex presidentes León Febres Cordero y Jaime Nebot también impactó en esta situación. Al mismo tiempo, la autonomización del tutelaje del gobierno por parte del imperio económico de Álvaro Noboa y la emergencia de una nueva generación política y financiera en Guayaquil pusieron en cuestión el dominio absoluto de la vieja guardia socialcristiana.

En la sierra, y particularmente en Quito, después del descalabro del gobierno de Jamil Mahuad, en enero de 2000, no se ha logrado configurar otro proyecto hegemónico de esas características. La Democracia Popular, el partido de Mahuad, había cumplido las funciones de vínculo con los grupos de poder económico, sedujo a las clases medias incorporando un discurso tecnocrático y organizó una amplia red clientelar en zonas populares. En la sierra, la enorme reconcentración financiera de estos últimos años no alcanza a expresarse y es previsible una gran fragmentación política.

Este debilitamiento de los proyectos hegemónicos tiene también su economía política. Es un secreto a voces que las formas de acumulación no legales van ganándole espacio a la economía legal. Podría hablarse incluso de un cambio de régimen de acumulación al observar el peso creciente de la economía de la usura, la rentabilidad de los delitos en las telefónicas, las cifras de narcolavado que manejan en privado los organismos internacionales y los porcentajes de los jugosos contratos públicos, que resultan infinitamente más cómodos que producir algún bien o servicio. La lumpen-burguesía no requiere reglas claras, proyecto de país,

mercado interno o seguridad jurídica. Al contrario, vive a condición de la más perversa desinstitucionalización. El contexto es complejo: un sector importante de la economía legal ha reconvertido sus mercados, proyectándolos al exterior, y su tendencia es insertarse en los circuitos transnacionales. Otros grupos tienen anclajes locales o regionales. De hecho, es difícil identificar en este momento un sector de poder con interés en el desarrollo integral del país y que tenga, además, la capacidad de llevarlo adelante.

Al mismo tiempo, la desindustrialización, el achicamiento del Estado, los nuevos flujos migratorios, la extensión de la informalidad y el desempleo, la dualización de las zonas rurales y el empobrecimiento de las clases medias han complejizado las sociedades y, en cierto modo, las han desestructurado. Resulta difícil imaginar hoy mayorías sociales homogéneas. La única constante es la pobreza, y aun ésta tiene cada vez más rostros. Esta crisis de hegemonía, con fragmentación y caos institucional, expresa el agotamiento del viejo orden. En este sentido, abre posibilidades para otras formas de organización socialmente más justas y políticamente progresistas. Pero es tan solo una posibilidad.

Es frente a este escenario, de crisis y oportunidad a la vez, que deben medirse las fuerzas de orientación democrática y progresista en la próxima contienda electoral. Y ésta es, precisamente, la mayor preocupación. En la izquierda, hay una seria desconfiguración política, ideológica y organizativa, a punto tal que en los últimos dos años ha sido casi imposible encontrar puntos de articulación concretos. La Izquierda Democrática (ID) ha privilegiado la alianza institucional con el Partido Social Cristiano (PSC); la izquierda marxista del Partido Socialista de Ecuador y el Movimiento Popular Democrático apoyaron la fase final del gobierno de Lucio Gutiérrez, incluyendo la imposición de una Corte Suprema de facto, cuestión que los distanció de su base social. Pachakutik, que agrupa a diferentes fuerzas sociales de raíz indigenista, no ha logrado resolver cuestiones centrales de su identidad político-ideológica, e incluso étnica. Por eso parece improbable que las elecciones reflejen un proyecto más o menos unitario, con capacidad para ganar y gobernar coherentemente.

La coyuntura política del 2006

La convocatoria a elecciones se realizará a mediados de julio, por lo que durante el primer trimestre del año se construirá el cuadro electoral. Teniendo en cuenta la fluidez política, la ausencia de reglas claras y los confusos signos emitidos desde

los principales partidos, el panorama aparece como sumamente volátil y puede cambiar mucho. Previsiblemente, la coyuntura política estará signada por tres hechos de importancia.

El primero es que el gobierno deberá tomar la decisión de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que después deberá ser ratificado –o no– por el Parlamento. Aunque el gobierno estadounidense ha dilatado el plazo debido a las presiones de Colombia, es muy probable que el presidente Alfredo Palacio se vea obligado a resolver esta cuestión, frente a la cual no ha lucido muy convencido.

Por otro lado, se prefigura una tendencia al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En los ocho meses de gestión, el actual gobierno ha fracasado una y otra vez en el intento de concretar un conjunto de reformas, vinculadas sobre todo a las reglas del juego electoral. El Congreso, dominado por una alianza entre Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, ha derrotado sistemáticamente al Ejecutivo, cuya ineptitud e ingenuidad han levantado más de una sospecha. A esta altura, es prácticamente improbable que ocurra una Asamblea Nacional Constituyente, que se convoque a una consulta popular o incluso que se produzcan reformas a las leyes de partidos y elecciones. Sin embargo, la comedia de enfrentamientos entre poderes que se ha puesto en escena avanza con su propia inercia. De hecho, la incertidumbre actual sobre el calendario electoral deriva de que altos funcionarios gubernamentales han dicho que las fechas podrían ser secundarias frente a la importancia de una improbable Asamblea Constituyente. Esa solapada amenaza de extender el mandato de Palacio ha sido respondida por la mayoría legislativa con el mensaje de que puede irse a su casa antes.

Aunque es probable que esta situación no pase de la pirotecnia mediática, hay dos factores que podrían provocar fuegos reales. El primero es la asociación entre la oposición movilizada en contra del Tratado de Libre Comercio y el hastío generalizado, lo que podría configurar un «efecto forajido»¹ con consecuencias impredecibles. El segundo factor desestabilizador son los posibles problemas de liquidez fiscal. En este sentido, el ministro de Finanzas ha señalado que no se cumplirá el presupuesto aprobado por el Congreso y ha dejado entrever un déficit fiscal con consecuencias de inestabilidad política.

¹ Se refiere a la rebelión de abril de 2005 que, con una alta dosis de espontaneidad y masividad, enfrentó en las calles de Quito al presidente Lucio Gutiérrez, quien la descalificó inicialmente como un grupo de «forajidos».

Pero, más allá de los escollos de la coyuntura política, hay un conjunto de problemas intrínsecos de la dinámica electoral, que comienza por la ausencia de reglas claras. En efecto, hasta el momento no ha sido definida la regla de asignación de escaños; no existe claridad en aspectos tan críticos como el control del gasto electoral, cuya aplicación se ha convertido en una verdadera burla; la composición del Tribunal Electoral levanta fundadas sospechas en temas como la inscripción de los movimientos independientes; y no está definido un mecanismo que garantice el acceso igualitario a los medios de comunicación. A esta lista habría que agregar la difusión de la noticia de que ningún partido tiene padrones reales y actualizados. El descrédito de los partidos afecta la legitimidad de los organismos de control electoral compuestos por ellos mismos.

Tendencias, partidos y candidatos

Hoy, prácticamente todas las encuestas ubican en los primeros lugares a Álvaro Noboa y a León Roldós, con intenciones de voto de entre el 15 y el 20%. Esta situación se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos meses.

Millonario magnate bananero y ex presidente de la Junta Monetaria del presidente Abdalá Bucaram, Noboa ha construido un partido-empresa en el que los límites, incluso físicos, entre su imperio económico y la acción política resultan indistinguibles. Con un mensaje burdo y clientelar dirigido a los sectores más pobres, se ha mantenido ocho años en campaña, estructurando pacientemente una estructura nacional. Si consolida una alianza con los grupos populistas serranos, incluido el partido del ex presidente Gutiérrez, tiene amplias posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

El ex vicepresidente Roldós, en cambio, luce como un candidato seguro. El buen resultado que obtuvo en las elecciones anteriores, cuando obtuvo un tercer lugar, lo ha ubicado en una situación expectante. En estos años, ha construido un movimiento de corte más ciudadano que político y es previsible que un abanico de fuerzas y candidaturas locales de perfiles muy diferentes lo lleven como candidato, replicando el efecto de indefinición ideológica de su campaña anterior.

Aunque estos candidatos lideran las encuestas, aún queda un trecho por recorrer en la formación de un panorama electoral. No tanto por una cuestión de tiempos,

sino por el hecho de que hay un conjunto de definiciones de fuerzas políticas importantes que aún están pendientes.

Una de las mayores incertidumbres es, precisamente, la participación del PSC, que durante la última década ha sido el más votado, tiene un gran influencia y cuenta con el mayor y más disciplinado bloque parlamentario. Sus principales líderes, el ex presidente Febres Cordero y el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, constituyen las mejores opciones electorales para la derecha ecuatoriana. Sin embargo, el notorio distanciamiento entre los dos (debido a estilos, concepciones, liderazgos e intereses) podría hacer desistir de su candidatura a Nebot. En elecciones pasadas, el PSC apostó a una derrota con el objetivo de preservar un bloque parlamentario y una fuerza de presión. Debido a la situación de bloqueo interna, el PSC podría intentar nuevamente esta jugada².

La Izquierda Democrática, por su parte, no ha podido resolver la sucesión del liderazgo de Rodrigo Borja. Cuatro precandidatos presidenciales y un clima de conflicto interno han debilitado su capacidad de convocatoria. Solo el actual alcalde de Quito, Paco Moncayo, tendría oportunidades reales de disputar la Presidencia, aunque sistemáticamente ha negado esta posibilidad.

El Partido Socialista lanzó un precandidato, aunque es probable que apoye al ex vicepresidente Roldós o, eventualmente, a Rafael Correa. Este joven ex ministro de Economía de los primeros meses del gobierno de Palacio se hizo un lugar en la opinión pública al oponerse a los organismos multilaterales de crédito y acercarse al gobierno venezolano de Hugo Chávez en temas como el energético y el manejo de la deuda. A partir de entonces, ha obtenido el apoyo de varios sectores sociales y se da por descontado que será auspiciado por un movimiento independiente, incluso con el respaldo de un sector del Movimiento Pachakutik.

Otras eventuales candidaturas tendrían menos significación electoral, pero pueden dispersar fuertemente el arco de fuerzas. En total, se han contabilizado más de diez candidaturas presidenciales, de las que probablemente cuatro o cinco tendrían posibilidades: Roldós, Noboa, Izquierda Democrática, el Partido Socialcristiano, y Correa.

² Según algunos entendidos, una figura «joven», como la diputada Cynthia Viteri, podría convertirse en una carta ganadora o con posibilidades, aunque opacaría el liberazgo de Nebot.

En síntesis, este panorama expresa la profunda fragmentación política y social que existe hoy en Ecuador y demuestra que las preferencias electorales siguen siendo en gran medida construidas regionalmente. Por otro lado, el hecho de que los candidatos con más chances provengan de los partidos tradicionales es un signo de su debilidad. A pesar de estos datos, no se trata de un colapso del sistema de partidos, ya que éstos mantienen una capacidad importante de acción política y un alto grado de legitimidad desde las gestiones de los alcaldes de varias ciudades del país³.

Retos y condiciones del nuevo gobierno

Desde una perspectiva democrática y progresista, las elecciones de octubre deberían establecer las condiciones para conducir a un periodo de transición, del fin del ciclo neoliberal hacia un modelo que retome el desarrollo, la democracia, la soberanía y la justicia social. Un punto fundamental en esta agenda es, precisamente, avanzar en la democratización política y la reconstrucción del Estado. Las condiciones geopolíticas exigen una estrategia soberana, que implique el fortalecimiento de las capacidades del país y la diversificación de sus mercados, sus fuentes de financiamiento y sus socios comerciales, además de la perseverancia de la unidad regional y continental. Con o sin TLC, es importante impulsar un nuevo modelo económico que coloque la producción y la generación de empleo como prioridades absolutas.

Estos desafíos exigen no solo ganar las elecciones, sino construir condiciones básicas para gobernar. Llevar a cabo este conjunto de transformaciones implicaría afectar muchos intereses, por lo que se requerirá de un intenso apoyo parlamentario, social y político. Eso supondrá, por lo tanto, un acuerdo firme, claro y estable de las fuerzas de tendencia progresista para enfrentar los comicios y, después, poder llevar adelante el ejercicio de gobierno. Para llegar a este punto habrá que revertir la tendencia al canibalismo político y a la dispersión, hacer un esfuerzo programático serio que rebase la demagogia y establecer mecanismos racionales de decisión de candidaturas y de coaliciones.

³ Entre ellas, Quito con Moncayo (ID), Guayaquil con Nebot (PSC), Esmeraldas con Estupiñán (MPD) y Cotacachi con Tituaña (Pachakutik).